

**GUAITARILLA.** Director de la Policía dice que los siete agentes muertos por el Ejército cumplían misión oficial

# Dos fiscales especiales investigan enfrentamiento

**El comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina,** indicó que "si hubo dolo los culpables deben responder". Familiares de los cuatro civiles que perdieron la vida dicen que las víctimas no eran paramilitares. Crece polémica por el choque armado.

Colpremsa

**Bogotá.** Dos fiscales especializados de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía y cuatro expertos del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, asumieron la investigación por la muerte de siete policías y cuatro civiles en confusos hechos en los que están involucradas tropas adscritas al Batallón Boyacá, en la madrugada del pasado sábado en Guaitarilla, Nariño.

La designación del equipo investigador fue confirmada ayer por el fiscal general, Luis Camilo Osorio, quien aclaró que la seccional de Pasto se hizo cargo del caso desde el momento mismo de los hechos.

Los dos fiscales y los técnicos del CTI se desplazaron hasta el lugar de los hechos para realizar una inspección judicial del sitio donde se produjo el supuesto enfrentamiento entre la unidad policial integrada por agentes del Gaula y la patrulla militar adscrita a la Tercera Brigada del Ejército. También tomaron declaraciones de testigos.

El caso ocurrió en el sitio Plan Grande, sobre la vía que del corregimiento de Alex conduce al casco urbano del municipio de Guaitarilla.

Los policías muertos fueron identificados como Mario Fernando Londoño Gil (sargento viceprimero), Clímaco Harold Mosquera, José Ordóñez Guerra, Hooper Enrique Carabali, Jaime Acosta Mesa, Mario Fernando Paz y Wilson Benítez de la Hoz.

Los cuatro civiles muertos, que al parecer acompañaban a la unidad policial, son: Francisco Javier Romero Villada, José Alberto Polivio Álvarez, Nino Bravo Montenegro y Alberto Iván Criollo Erazo.

Una de las declaraciones que tomarán los fiscales es la de Jesús Hernando López Erazo, quien

**Ayer fue sepultado en Marsella, Risaralda,** el sargento Mario Fernando Londoño, uno de los siete policías muertos.

## Piden celeridad en indagaciones

**Congresistas afirman que el incidente se registró por el afán de las tropas de mostrar resultados en la lucha contra los alzados en armas y el narcoterrorismo.**

Sectores políticos del país también exigieron a las autoridades acelerar las investigaciones por el incidente militar. Según el senador uribista Dieb Malcof, el confuso hecho es una consecuencia de la disolución encarnizada de las instituciones por mostrar resultados. "Este es el famoso afán por decir que si estamos sacando a los bandidos

también hacía parte del grupo atacado y que sobrevivió a un disparo en el pecho. El civil se halla recluido en el Hospital Departamental de Pasto.

Los fiscales especializados también analizarán los resultados del informe de la necropsia practicada a los cuerpos. Según fuentes de Medicina Legal, los cadáveres presentaban huellas

de sus sitios y de pronto llevándose algunos civiles como ha sucedido en Nariño", dijo. Por su parte, el senador Antonio Navarro, del Polo Democrático, aseguró que no son claras las circunstancias que rodearon el incidente militar y se citó a la Fiscalía una investigación seria y un debate en el Congreso sobre las relaciones interinstitucionales.

de pólvora, lo que podría sugerir que habrían recibido tiros a corta distancia.

Con base en un video entregado por la Policía, supuestamente filmado por las víctimas antes del ataque, los fiscales tendrán información sobre las actividades que realizaban los agentes del Gaula. Sin embargo, deberán verificar si la labor que

realizaban en la zona, tanto las unidades policiales como los efectivos del Ejército, era conocida por sus superiores.

Por ese motivo, los fiscales contemplan la posibilidad de llamar a declarar a los cuadros de mando del Batallón Boyacá del Ejército y del Gaula.

Al respecto, el director nacional de la Policía, general Jorge Daniel Castro, reiteró ayer en el Congreso que los agentes del Gaula "habían sido encomendados para una misión especial". La declaración la hizo al término de un debate en la Comisión Segunda del Senado sobre el avance de las políticas de seguridad.

A su turno, el comandante del Ejército, general Martín Orlando Carreño, quien también fue citado a la célula legislativa, se abstuvo de comentar los hechos y dijo que "prefería mantener la reserva al respecto para evitar contradicciones".

A su vez, el comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, indicó que "si hubo dolo los culpables deben responder".

El ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, aseguró que el enfrentamiento se originó por "un problema de información".

Entre tanto, familiares de los civiles muertos rechazaron las indicaciones en el sentido de que las víctimas eran paramilitares.

Julio Criollo y María Teresa Erazo, padres de Alberto Iván Criollo Erazo, dijeron que su hijo fue "desde niño un agricultor", y que las versiones que señalan a su hijo como miembro de grupos paramilitares son especulaciones.

"Por sacar el honor en limpio del error que cometieron, están culpando a los civiles como delincuentes, pero no lo eran", aseguró Alejandrina Álvarez, madre de José Alberto Polivio Álvarez.